

ESTRATEGIA

ISSN-0185-6391

REVISTA DE ANALISIS POLITICO

XV ANIVERSARIO



Ante la crisis política...
nuestra lucha continúa
(entrevista a Cuauhtémoc Cárdenas)

Precio Pacto
\$ 5,820

90

noviembre
diciembre
1989

situación política	
La crisis política: entre la modernización y las catacumbas <i>Luis González Souza /</i>	1
La oligarquía: núcleo económico-político del proyecto «Modernizador» <i>Víctor Cruz S., Cecilia Madero, Rodolfo Pacheco /</i>	15
Reprivatización económica, re... privación de la sociedad <i>Alejandro Covarrubias /</i>	22
Las grietas del sindicalismo oficial y la lucha de los trabajadores del IMSS <i>Oscar Alzaga /</i>	33
La lucha de los maestros: nuevos y más difíciles retos <i>Ignacio Hernández, Carmen Velázquez /</i> (Entrevista)	38
Nuestra lucha continúa: Cuauhtémoc / «Modernización» monopolista en la caficultura <i>Fernando Ruíz /</i>	43
documentos	
La crisis capitalista en América Latina, algunos nuevos rasgos <i>Alonso Aguilar Monteverde /</i>	69

Estrategia. Revista de análisis político. Publicación bimestral de PUBLICACIONES SOCIALES MEXICANAS S.A. México, Año XV, Vol. 6, No. 90, noviembre-diciembre de 1989. Dr. Vértiz 1295-202 (Plaza Jorge Dimitrov). Col. Letrán Valle, 03650 D.F. o Apdo. Postal 73-206, 03020 México D.F. Tel. 604-75-39.

DIRECCION COLECTIVA: Alonso Aguilar M., Ignacio Aguirre, Fernando Carmona, Jorge Carrión, Ignacio Hernández. GERENCIA: José Rodríguez M. DIFUSION: Perfecto Bello H., Gabriela Hernández, Andrés Peñaloza.

COLABORADORES: Rodolfo Barona, Víctor M. Bernal, Luis Carrión, Víctor Cruz, Luis González Souza, Jesús Hernández G., Gastón Martínez Rivera.

AUTORIZADA como correspondencia de 2a. clase Registro DGC 0050675 características 229251 209.

SUSCRIPCIONES: En México, anual ordinario 30,000 pesos; anual de apoyo 60,000 pesos; anual institucional 60,000 pesos. En el extranjero: 25 dólares EUA. Precio del ejemplar 6 000 pesos; ejemplares atrasados 6 000 pesos. Portada: Irma Carrión.

LA CRISIS CAPITALISTA EN AMERICA LATINA algunos nuevos rasgos

Alonso Aguilar Monteverde

Cuando se repara en la crisis que desde hace años afecta a la América Latina, suele quedar la impresión de que lo que se dice acerca de ella es bien conocido e incluso que se tiende a repetir lo que, probablemente, no es ya como se le presenta. El riesgo de volver sobre ciertos hechos y, sobre todo el no advertir cambios importantes que obliguen a reapreciar de nuevas maneras y desde otras perspectivas el fenómeno de la crisis y el escenario en que se desenvuelve está, sin duda, presente. Pero ocurre también que si se insiste en ciertas cosas ello obedece a que la crisis y los desajustes fundamentales en que se expresa, persisten.

Como decía hace algunas semanas la CEPAL: "En definitiva, para la región la crisis económica de los ochenta persiste. Su ingente costo social incluso se tradujo en el primer semestre (de 1989) en estallidos de violencia, y al concluir el año el producto medio por habitantes será de casi 10% inferior al de 1980. Y si éste es el promedio aritmético global, el deterioro en los países más afectados por la crisis es mucho mayor. Se estima, por ejemplo que en 16 de ellos el producto por habitante en 1988 fue apenas comparable al de 1960 a 1974. Y entre tales países figuran algunos tan importantes como Argentina, Venezuela y Chile.

Ponencia presentada en el Seminario Internacional "Crisis, deuda y perspectivas de desarrollo en América Latina", en la Habana, Cuba, del 15 al 17 de noviembre, para conmemorar el X Aniversario del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial.

Según la propia CEPAL, el PIB creció sólo 2.9% en 1987, y 0.5% en 88 y quizá lo haga 0.2% en 1989, lo que significa que nuestras economías continúan, en conjunto, estancadas. Pero aun en este favorable contexto se registran cambios significativos en los últimos años. Mientras Brasil, sobre todo, y en menor medida Colombia y otros países aumentan su participación en el PIB latinoamericano, la de México y más aún, Argentina, disminuye.

En el curso de la crisis se recompone el capital y cambia la estructura productiva. Las condiciones al respecto difieren, desde luego, de un país a otro, no obstante podría decirse que al menos en varios de los más importantes se advierten estas tendencias:

- 1) En los años más difíciles numerosas empresas, incluso de las más poderosas, sufren cuantiosas pérdidas, lo que entraña una masiva desvalorización de capital;
- 2) pierde impulso el proceso de industrialización, aumentando en cambio la participación del comercio en el producto global;
- 3) se reduce, en particular, la producción de ciertos bienes durables de consumo, intermedios y de capital;
- 4) baja la tasa de acumulación y, sobre todo, la inversión y el capital públicos, elevándose en cambio en algunos casos la inversión extranjera;
- 5) coinciden a menudo el descenso de la inversión productiva y el aumento del capital ficticio y la inversión financiera, y aun propiamente especulativa en los mercados de cambios, de valores y bienes raíces, lo que a menudo se expresa en situaciones en que aun empresas que reportan pérdidas de operación, obtienen cuantiosos ingresos financieros que las compensan y resultan en ganancias finales;
- 6) se acentúa la concentración de la riqueza y el ingreso y hay una restructuración del capital monopolista, el que en conjunto adquiere creciente importancia;
- 7) se estrecha la relación entre el capital monopolista nacional y extranjero, sobre todo debido a la creciente presión que ejerce la deuda externa, la forma y condiciones en que se incorpora la nueva tecnología y la influencia que ejerce la política de apertura hacia el extranjero;
- 8) la inestabilidad, la dificultad para realizar nuevas inversiones y las altas tasas de interés en los mercados financieros internacionales y especialmente en los Estados Unidos, estimulan como nunca antes la fuga de capitales, lo que junto con la pesada carga que impone el servicio de la deuda y la casi total suspensión de nuevos créditos del exterior, impide el crecimiento y la utilización productiva del excedente y provoca transferencias masivas de capital hacia los países capitalistas industrializados;

- 9) se multiplican los intentos de reorganización y concretamente de «racionalización», sobre todo de grandes empresas, con miras a reducir costos de producción y gastos de operación;
- 10) se avanza desigualmente en la incorporación de nueva tecnología, modernizándose ciertas actividades y fases del proceso productivo sobre todo en algunas grandes empresas extranjeras y nacionales, aunque a la vez otras rezagan debido a la ausencia de nuevas inversiones; y
- 11) se intensifica la contradicción capital-trabajo, porque la mayor producción por persona ocupada no sólo no se traduce en un incremento proporcional de los salarios reales sino más bien en tasas de explotación crecientes.

Pese a la cuantiosa desvalorización de capital en los años ochenta, lejos de que se produzca una renovación de capital fijo y una firme recuperación, la inversión cae entre un 25% y 33% respecto al decenio anterior, sin que se logre hasta ahora restablecer la continuidad del proceso de acumulación, hecho de que por sí solo da cuenta de la profundidad y persistencia de la crisis, de que ésta no es igual que las previas y de que el sistema de regulación fue hasta aquí ineficaz para resolver las contradicciones más graves.

Conforme a cifras del BID, tan sólo en 1983 y 88 la caída de la inversión fue en conjunto de 356 556 millones de dólares, de los que cerca de 242 mil millones correspondieron a los cuatro principales países, y de éstos, 95 mil a México. El descenso de la inversión en maquinaria y equipo fue especialmente severo. En cuanto al consumo, el actual creció ligeramente respecto al de 1980 en Brasil, México y Colombia —y lo más probable es que sólo en la minoría rica—, bajando en cambio en Argentina y otros países.

Si de un lado persisten el estancamiento, la descapitalización y el desempleo y subempleo, del otro siguen también presentes los desajustes comerciales y financieros, y la inflación. Esta, en 1989 continúa siendo un grave problema en Argentina, Brasil, Nicaragua y Perú. El incremento de los precios supera en los primeros tres países el 1 000% y en Perú excede de 5 000%. Argentina y Brasil sufren una fuerte devaluación monetaria y sustanciales pérdidas en sus reservas internacionales. Colombia, México y Venezuela logran reducir apreciablemente la elevación de los precios, pero al igual que en Uruguay y otros países, la economía casi no crece, salvo en México en donde en el segundo semestre hubo un ligero repunte. Y tanto en naciones más o menos afectadas por la inflación como Brasil y Perú, de un lado, y México y Ecuador del otro, los salarios mínimos se reducen en los últimos años a la mitad.

La masiva transferencia neta de recursos al exterior —según la CEPAL de 200 mil millones de dólares en sólo los últimos siete años—, contribuye a agravar el déficit financiero público y la inflación.

La deuda externa de América Latina alcanza ya 410 mil millones de dólares, y de hacerse los pagos correspondientes su servicio reclamaría 38 mil millones de dólares en el presente año, aunque en realidad son pocos los países que se mantienen al corriente, lo que explica la fuerte caída de las cotizaciones de los pagarés de deuda en los mercados secundarios.

México renegocia recientemente su deuda en el marco del llamado Plan Brady, y otros países están por hacerlo. Pero si bien ello entraña cierto alivio y la liberación de algunos recursos financieros debido a la reducción del principal y de las tasas de interés y al ofrecimiento de nuevos créditos, la situación seguirá siendo difícil mientras no se refuerce la inversión productiva, reanude el crecimiento y mejoren las condiciones de vida de la mayoría. Y los términos de la renegociación de los bancos comerciales con México no podrán trasladarse fácilmente a otros países ni son un "modelo" para el arreglo de la deuda latinoamericana.

En general, la relación de intercambio ha sido desfavorable. En 1989 mejoraron los precios del cobre, zinc y petróleo en tanto que declinaron los del café, cacao y banano, y otros continuaron a muy bajos niveles. Aunque en menor medida que en años anteriores, la balanza comercial volvió a ser favorable —en gran parte porque siguen deprimidas las importaciones mientras que la cuenta corriente, en su conjunto será deficitaria en unos 12 500 millones de dólares, y las reservas de divisas disminuyen.

En resumen, si bien el capital continuó restructurándose, las tasas de ganancia y de explotación se elevaron en diversas actividades, y se mantuvo la política económica contraccionista con la que una y otra vez se ha asegurado que se restablecería la estabilidad, se iniciaría la recuperación y se saldría de la crisis, la situación continuó siendo difícil no sólo en la economía sino en la vida social y política de la región, porque como se sabe, la presente crisis es ciertamente económica, pero también social y política.

Desde luego esto no significa que lo que acontece en la esfera social y política sea un mero reflejo de las crecientes dificultades económicas. De ninguna manera. Los problemas y contradicciones de uno u otro carácter no se trasladan ni reproducen mecánicamente. Mas lo que sí puede afirmarse es que el agravamiento y la persistencia de la crisis económica, o en otras palabras la incapacidad para iniciar una fase de recuperación y reanudar a partir de ahí, a medio y largo plazo el crecimiento económico, que exhiben las conservadoras políticas en boga, sin duda ha contribuido a que la problemática social adquiriera una nueva dimensión cuantitativa y, en algunos casos, incluso una calidad diferente.

En la esfera propiamente social, lo que a nuestro juicio comprueba la gravedad de la crisis, es sobre todo el empobrecimiento

de una cada vez mayor parte de la población. Los ingresos reales de amplias capas han sufrido, como ya se dijo, un retroceso sin precedentes. Y el deterioro en los niveles de vida no afecta hoy solamente a los segmentos más pobres del campo y la ciudad sino, además, a millones de obreros, empleados, pequeños productores y comerciantes, profesionistas y, en general, a las capas medias concretamente urbanas. Alarma en verdad el hecho de que probablemente más del 40% de la población vive en muchos países en condiciones de extrema pobreza, o sea careciendo incluso de lo indispensable, desprovista de servicios básicos, a menudo sin empleo o apenas sobreviviendo en la llamada economía «subterránea», sin perspectivas de mejoramiento a corto y medio plazo.

Otros rasgos de la crisis social son el aumento del desempleo, la mendicidad, la violencia, la inseguridad, el pandillerismo, un mayor índice de delincuencia, la extensión del narcotráfico, la corrupción, todo lo cual se da en sociedades en las que, en el curso de la crisis se ha extremado la inequidad en el reparto de la riqueza, pues ésta se concentra hoy no sólo en una minoría privilegiada sino fundamentalmente en un puñado de poderosos grupos monopolistas en los que se sustenta el nuevo poder oligárquico.

En cuanto a la crisis política, aparte del desgaste del discurso ideológico tradicional, sobre todo a medida que las palabras se divorcian cada vez más de los hechos y van perdiendo sentido, se advierten frecuentes desacuerdos en el seno de la clase en el poder e incapacidad para resolver los problemas más graves, decisión de mantener una política conservadora que en lo fundamental se impone desde fuera y no responde a los intereses de nuestros pueblos, serias limitaciones en la vida democrática incluso en aquellos países que recientemente se libran de regímenes abiertamente dictatoriales, tendencias a restringir y aun cancelar derechos especialmente de los trabajadores; explicables protestas, huelgas y movilizaciones de éstos para tratar de detener la dramática caída de sus salarios y el deterioro de sus condiciones laborales; movimientos populares de diverso tipo, en general bastante heterogéneos, y que en el plano electoral o en otros frentes de lucha expresan la inconformidad de amplios sectores sociales frente al actual estado de cosas y el rechazo de los antidemocráticos sistemas vigentes; persistencia en varios países como Guatemala, El Salvador, Colombia e incluso Perú, de conflictos armados y de acciones represivas que revelan una mayor intensidad en la lucha de clases y, en fin, acentuación de la dependencia del imperialismo, lo que limita cada vez más la capacidad de maniobra de las clases dominantes en nuestros países, lesiona gravemente nuestra soberanía nacional y popular, angosta y aun vuelve imposible un desarrollo realmente democrático e incluso se expresa en acciones ilegales y en formas de intervención directas y brutales como las que están presentes en Honduras, Nicaragua y Panamá.

La crisis y la política económica neoconservadora

Los anteriores son algunos de los rasgos de la actual crisis, o más bien de su última fase, es decir de los años ochenta. Y si bien dejan ver lo que acontece en años recientes en América Latina, para comprender mejor la presente situación conviene recordar, así sea bravemente, lo que distingue a la política económica con la que se pretende responder a la crisis. Conviene hacer tal cosa porque lo que ocurre no sólo obedece a la crisis sino a la política económica en acción, la que incluso contribuye a agravar ciertos desajustes.

Desde luego las políticas que se adoptan en los diferentes países de la región no son idénticas, y menos las condiciones que privan en cada uno de ellos. No obstante puede afirmarse que la respuesta latinoamericana a la crisis, sobre todo a partir de 1982 es —con excepción de Cuba y Nicaragua— prácticamente la misma.

En primer lugar, en los círculos dominantes de los diversos países se acepta, en general, que la crisis es propiamente financiera, más que una que exprese contradicciones más profundas, propias del proceso de acumulación capitalista. Y en cuanto a sus principales causas, mientras los gobiernos latinoamericanos tienden a poner énfasis en factores externos desfavorables como el deterioro en la relación de intercambio, el alza sin precedente de las tasas de interés, el proteccionismo de los países industriales, su lento crecimiento y la súbita suspensión del crédito del exterior, y a veces atribuyen la crisis al agotamiento del «modelo» de acumulación o desarrollo basado en la sustitución de importaciones, en otros países, y concretamente en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones financieras, se piensa que los graves desequilibrios de la economía latinoamericana son fruto de políticas inadecuadas y erróneas de corte «populista», de la tendencia a sobrevaluar sus monedas y endeudarse en forma desmedida, del aumento innecesario del gasto público y de una excesiva intervención del Estado en la vida económica, que interfiere en los mecanismos del mercado e impide que éste juegue el papel regulador y racionalizador que le corresponde, asignando los recursos productivos como mejor convenga al desarrollo.

A partir, en lo fundamental, de tales consideraciones, cuando el desequilibrio de las balanzas de pagos se agudiza y el problema de la deuda externa se vuelve crítico —hasta el punto de que la crisis misma se ve por muchos como «crisis de la deuda»— bajo la influencia en particular del FMI empieza a diseñarse una política económica en la que destacan los rasgos siguientes:

- 1) Ante el agravamiento de la inflación y los problemas del llamado sector externo, lo primero que procede hacer es reordenar las economías y restablecer la estabilidad, lo que supone suavizar la in-

flación. Para lograrlo, los gobiernos deben reducir sin demora su *déficit financiero*, dejar de subsidiar ciertos bienes y servicios y adoptar políticas monetarias contraccionistas sobre todo a partir de la reducción inmediata de sus gastos corrientes y, de ser preciso, de la propia inversión pública. Para restablecer la confianza de la comunidad internacional y contribuir a que el financiamiento externo se reanude, dichos gobiernos deben además cumplir puntualmente con las obligaciones que la deuda les impone y adoptar medidas que les permitan aumentar su capacidad de exportación, incluso de capital, esto es devaluar sus monedas, impulsar sus exportaciones tradicionales, y de ser posible las de manufacturas, y reducir importaciones para asegurar un superávit comercial y en cuenta corriente.

- 2) La política económica de que hablamos pone el mayor acento en la reordenación o restablecimiento de la estabilidad, pero incluye además otro aspecto importante que es el del llamado «cambio estructural» o «reestructuración» económica. Pues bien, aunque a menudo no se precisa el alcance de ésta no hay duda de que algunos de sus aspectos exhiben las múltiples y complejas formas en que la crisis misma afecta al capital y a la estructura productiva, en tanto que otros son consecuencia de la política económica, o sea de la respuesta a la crisis. Y aun en este plano se observan situaciones diversas, entre las que probablemente destacan las siguientes: 1- medidas generales, principalmente de carácter gubernamental, que influyen sobre ciertas variables macroeconómicas y sobre la intervención del Estado, y que, al menos formalmente, pretenden contribuir a modernizar la economía y a elevar su nivel de eficiencia y de competitividad; 2- intentos, especialmente de parte del capital monopolista privado nacional, de reorganizar su funcionamiento, que permita elevar la tasa de ganancia, a partir sobre todo de una mayor productividad y mayores tasas de explotación de la fuerza de trabajo, y 3- ajustes estructurales como los exigidos por el FMI y otros organismos financieros, que la nueva división internacional del trabajo y concretamente la internacionalización del capital imponen, conforme a la orientación «neoliberal» que defienden los países capitalistas industrializados y especialmente los Estados Unidos, a partir del gobierno de Reagan, y que postula una nueva *laissez faire* que a diferencia, sin embargo, del que la economía neoclásica y el mercado conocieron en la fase librecompetitiva y premonopolista, ahora resulta un mecanismo que opera esencialmente bajo la influencia del capital monopolista transnacional.

Lo que ese «cambio estructural» supone es abrir las economías nacionales hacia el exterior y orientarlas hacia la exportación, a fin de lograr el equilibrio externo, pagar la deuda y obtener nuevos finan-

ciamientos que permitan superar la crisis, elevar la inversión privada, incorporar la nueva tecnología y reanudar el crecimiento económico a mediano y largo plazo.

El eje del cambio estructural, conforme a ese enfoque es la inversión privada nacional y extranjera, actuando «libremente» en respuesta a los mecanismos del mercado. En tal virtud, lo que se requiere para asegurar el éxito es:

- reducir al mínimo la intervención del Estado en la economía, y liquidar y sobre todo privatizar las principales empresas paraestatales, especialmente en las industrias de bienes intermedios básicos y de capital;
- restringir y aun abandonar los controles e incluso los mecanismos de regulación de precios, dejando que éstos los fije el mercado;
- mantener, no obstante, una política de control del movimiento sindical y de bajos salarios reales que atraiga al capital nacional y extranjero, y de activa presencia del Estado en el sistema monetario-financiero;
- liberalizar el comercio exterior, eliminando restricciones no arancelarias y bajando los aranceles tanto para promover la exportación como para aumentar las importaciones de los más diversos artículos, lo que en la práctica implica en gran medida el menosprecio —supuestamente debido a su inoperancia— de la política de sustitución de importaciones;
- otorgar crecientes facilidades al capital extranjero, y concretamente al transnacional, porque éste es el más avanzado tecnológicamente y el que puede contribuir de manera más eficaz al proceso de modernización y porque, dada su influencia comercial y financiera a escala incluso mundial, es también el más eficiente y competitivo.

Tales facilidades debieran consistir en mayor libertad para operar en nuestros países, abriendo incluso campos antes restringidos y aun vedados al capital extranjero, manteniendo un régimen de libertad de cambios que permita enviar las utilidades al exterior, ofreciendo una infraestructura adecuada, creando plataformas de exportación para empresas maquiladoras que operen bajo un régimen especial, permitiendo el cambio de deudas por acciones de las empresas endeudadas y asegurando una amplia disponibilidad de mano de obra, inclusive con niveles medios y altos de calificación, joven, sin problemas sindicales y dispuesta a trabajar con bajos salarios.

- mantener una política fiscal benigna y que no grave excesivamente a las grandes empresas privadas nacionales y extranjeras, pues los bajos impuestos son, según los apologistas de la «economía del lado de la oferta», un incentivo fundamental para aumentar la inversión y la producción;

- considerar que la propiedad debe ser fundamentalmente privada, y que el Estado, lejos de competir con los empresarios debe apoyarlos directa e indirectamente, limitándose a una acción reguladora flexible que no implique trabas ni restricciones burocráticas y que deje al capital privado un amplio margen de libertad.

La política económica «neoliberal» en boga se atribuye a menudo o se asocia estrechamente al Fondo Monetario, en parte debido a que, sobre todo a partir de 1982, algunos de sus rasgos más característicos figuraron en los programas de ajuste del FMI y fueron incluso condición para el otorgamiento de préstamos a países en dificultades financieras. Pero desde luego no es privativa de esa institución. En realidad está presente en el Plan Baker —que surgió de la Tesorería norteamericana— y en el Plan Brady; en años recientes la hizo suya también el Banco Mundial y poco después el BID y aun la banca comercial, y lo cierto es que responde a los intereses del capital no sólo norteamericano sino de otros países. Por lo que podría decirse que tal política se inserta y a la vez es uno de los principales componentes de la estrategia del desarrollo del capital monopolista trasnacional.

Pero más que ser una política unilateral y arbitrariamente impuesta desde fuera, se trata de una línea de acción que en algunos aspectos toma en cuenta y expresa parcialmente a la vez, tanto ciertos intereses del capital y de la oligarquía monopolista nacional como de elementos burgueses conservadores que ejercen gran influencia en la dirección económica de los gobiernos latinoamericanos, en los países económicamente más desarrollados.

El saldo de la política económica en acción

De hecho, la política económica de que hablamos se pone en práctica a lo largo del presente decenio, aunque algunos países la adoptan antes y con menos reservas que otros, y ciertas modalidades cambian en el proceso de su aplicación. Y hay suficientes elementos para evaluar sus resultados.

- Dicha política, en primer lugar, contribuyó sin duda a convertir el déficit comercial y en cuenta corriente, en un cuantioso superávit que, paradójicamente, en plena crisis hizo de Latinoamérica una exportadora neta de capital. Ello fue posible debido en gran parte al desplome de las importaciones y, por otra parte, el excedente se destinó en lo fundamental a pagar la deuda externa, lo que a menudo reclamó una dramática sangría del 6% del PIB y se constituyó en uno de los principales obstáculos al crecimiento económico en nuestros países.
- El pago de la deuda y la adopción de la restrictiva y ultraconservadora política impuesta por el FMI y el capital trasnacional no

restablécieron la confianza ni se tradujeron en nuevos créditos o siquiera en la suspensión de la fuga de capital. En realidad la inversión siguió deprimida —salvo cierta afluencia a pocos países de capital privado extranjero— y la economía continuó prácticamente estancada.

- En el marco de la nueva política cobró gran importancia la liquidación, transferencia, fusión y, sobre todo, venta de empresas paraestatales a empresarios privados, que en realidad fueron casi siempre poderosos monopolios. Y si bien a menudo se dijo que con ello se pretendía «adelgazar» a un Estado obeso y hacerlo más eficientemente, lo cierto es que el sector público en su conjunto se ha debilitado ante el embate de una ideología empresarial conservadora que considera que lo que no sea servir, concretamente a las fracciones más poderosas del capital privado, en una acción estatal dudosa, innecesaria y aun inaceptable.

En México, en particular, en donde la inversión y el capital públicos habían crecido con rapidez hasta 1976, en los últimos años se autorizó liquidar o vender más de 700 empresas y organismos paraestatales, y aunque se reiteró que el Estado retendría las empresas «estratégicas» y conservaría la mayor parte del capital en las «prioritarias», lo cierto es que en campos fundamentales como la petroquímica básica, el transporte aéreo, el servicio telefónico, un buen número de industrias de bienes de capital y otras que el propio gobierno consideraba al menos «prioritarias», se entregaron a poderosos capitalistas privados, a veces incluso extranjeros, quienes a la postre han hecho pingües negocios a costa del Estado.

- El avance tecnológico, que en la política de «reestructuración» juega un papel muy importante se realizó, hasta ahora, en general con lentitud y muy desigualmente. En conjunto, dado el impulso de la revolución científico-técnica en los principales países industriales y el estancamiento de nuestras economías, seguramente el saldo de estos años es de un mayor rezago, o sea una ampliación de la brecha que nos separa de los países más avanzados. En Brasil, México y otros países no obstante, sobre todo en ciertas líneas y procesos se realizaron cambios significativos. Tomando el caso de México para ilustrar lo ocurrido, cabría destacar lo que sigue:
- los principales avances tecnológicos corresponden al capital transnacional en industrias como la automotriz, electrónica, química y petroquímica y de diversos tipos de maquinaria y equipo, así como en estos y otros campos que operan dentro del régimen de las maquiladoras. Gracias a la reestructuración de la industria automotriz, esto es, de los grandes transnacionales que la controlan— Ford, General Motors, Chrysler, Nissan y Volkswagen—, México se convirtió en un gran exportador de motores y aun de automóviles terminados;

- en general también se modernizaron, ganaron terreno como exportadores y se fortalecieron los principales grupos monopolistas mexicanos. Entre otros, por ejemplo, Alfa en la industria siderúrgica, química y petroquímica y CYDSA en ésta última; *Vitro* en la fabricación de vidrio, *DESC* en autopartes y productos químicos, *Cemex* en cemento, *VISA* y *Cervecería Modelo* en cerveza, *Celanese Mexicana* en fibras químicas y *Peñoles* en diversos metales.
- la reducción del déficit fiscal, a través sobre todo del recorte del gasto público y en particular del gasto y los servicios sociales, debilitó la inversión del Estado, tuvo un efecto recesivo y afectó gravemente a amplias capas de la población;
- la liberación comercial se hizo a menudo de manera apresurada y resultó en crecientes importaciones y amplias facilidades a la industria extranjera, sobre todo en el último trienio, mientras los países industriales y concretamente los Estados Unidos mantenían su tradicional proteccionismo. Y en cuanto a las exportaciones, sólo pocos países lograron aumentarlas y más pocos aún mejorar su composición e incrementar la venta de manufacturas. Brasil y México, sin embargo y en menor medida Colombia y otros países hicieron al respecto avances significativos.¹
- La decisión de mantener tasas de interés positivas en los mercados financieros internos, para estimular el ahorro y detener la fuga de capitales se tradujo en el encarecimiento de créditos y en el desvío de fondos y oleadas especulativas en el mercado de valores que entrañan una presión inflacionaria;
- La política laboral, en su conjunto fue muy lesiva a los intereses de los trabajadores, caracterizándose por bajos salarios mínimos y contractuales, desconocimiento y violación de contratos colectivos de trabajo, cancelación de derechos obtenidos desde años atrás, intensificación de cargas laborales, despidos ilegales e injustificados e intentos, o bien de estorbar la organización sindical de los trabajadores o bien de someter a los sindicatos —so pretexto de «modernizarlos» y «flexibilizarlos»— a condiciones muy desfavorables, todo lo cual de hecho se expresa en una mayor explotación de fuerza de trabajo.

¹ México, por ejemplo, entre 1982 y 1988, aumentó la exportación de manufacturas de 2 357.2 a 10 525.5 millones de dólares, lo que fue muy importante sobre todo porque la caída de los precios del petróleo afectó las ventas de éste, las que bajaron de 16 477.2 a 6 709.1 millones de dólares y el 77.6% al 32.5% de la exportación total. En ese mismo breve periodo la exportación de manufacturas pasó del 14.6% al 59.9% (cifra esta última provisional) de las exportaciones totales. Y el mayor aumento de dicha exportación correspondió, en primer lugar a productos metálicos y maquinaria y equipo, rubro que alcanzó el 25.7% del total exportado, a productos de la industria química -11.5%- y en menor medida a las industrias alimenticias y textil.

- Aunque en general se reconoce que al Estado corresponde la rectoría económica y una amplia función reguladora, ambas se debilitan en el marco de la actual política. Y si bien el Estado se repliega y aun acepta no interferir con la acción del mercado, los monopolios en cambio —que incluso curiosamente se consideran el eje del «mercado libre»—, lo hacen y de hecho contribuyen a que tal mecanismo opere de manera especialmente anárquica e irracional en la asignación de los recursos. Para comprobarlo bastaría recordar la inflación, las devaluaciones monetarias, la sobreproducción y existencia de capacidad productiva ociosa, el desempleo, el estancamiento, la fuga de capital, las ruinosas condiciones que impone la deuda externa y el alto costo social de esta nueva versión monopolista del *laissez-faire*.
- Y otros hechos especialmente graves que muestran el saldo real profundamente negativo de la política económica “neoliberal” consisten en el debilitamiento del capital nacional, sobre todo de ciertas empresas paraestatales y en general del capital no monopolista y la mayor importancia que, en cambio, adquiere el capital transnacional en campos fundamentales; la creciente dependencia económico-financiera e incluso cultural y política y la profunda lesión a la soberanía nacional que entraña el que ya no sólo ciertos aspectos de la política monetaria, cambiaria, comercial y financiera sino de hecho toda la política económica e incluso la estrategia del desarrollo en que se inserta se impongan desde fuera, lo que atenta incluso contra la soberanía del Estado.

Nuevas formas de operación del capital monopolista

No podríamos, aquí, examinar siquiera los principales cambios que sufre el sistema capitalista en sus relaciones de producción, en la última fase de la actual crisis. Mas si hemos de evaluar la perspectiva de desarrollo de nuestros países, al menos es preciso tener en cuenta algunas de las nuevas formas de funcionamiento del capital monopolista transnacional y nacional, y los cambios que sufre la relación entre uno y otro. Veamos:

- El primer hecho digno de subrayarse es que si bien el imperialismo entraña, entre otras cosas, una succión o drenaje crónico de fondos y aun de otros recursos productivos, en particular desde los países económicamente subdesarrollados al capital financiero que opera sobre todo en las metrópolis imperialistas, en los últimos años y en tratándose en particular de América Latina tal tendencia se agrava como nunca antes. O en otras palabras: la enorme y ruinoso deuda externa, el envío al exterior de utilidades vía inversión extranjera directa, la acentuación del intercambio

desigual y la manipulación interna de precios que hacen las transnacionales, el alto costo de la tecnología y de la asistencia técnica, de la prestación de otros servicios y la fuga de capital, entrañan una transferencia masiva de recursos y de capacidad productiva que supera todo lo que hasta ahora conocimos y se vuelve el principal obstáculo estructural al desarrollo.

- Un segundo hecho muy importante consiste en que, a diferencia de lo que ocurrió en otras épocas y concretamente antes de la actual crisis, el capital extranjero ya no se limita ni le interesa fundamentalmente tan sólo adquirir ciertas materias primas y ampliar sus mercados latinoamericanos, invirtiendo sobre todo en actividades primarias, en la producción industrial de bienes de consumo y en ciertos servicios, ahora, en primer lugar es un acreedor en grande escala y un inversionista en las nuevas, más dinámicas, más complejas y a menudo estratégicas actividades industriales, lo que sin duda influye en la desnacionalización de la economía.

A diferencia incluso de lo que ocurrió en el marco de la política sustitutiva de importaciones, el capital extranjero, si bien no desatiende el mercado interno, se proyecta creciente y fundamentalmente hacia la explotación, operando cuando es viable en nuevas plataformas que ofrecen ventajas de localización, adecuada infraestructura y mano de obra abundante y barata, y desde las que cubren ciertas fases del proceso productivo.

- La explotación de esa mano de obra, si bien es creciente en algunos de nuestros países, se realiza además en los propios Estados Unidos, a donde, bajo el impacto de la crisis, la miseria, la inseguridad y el desempleo emigran centenares de miles de trabajadores sobre todo de México, Centroamérica y varios países del Caribe —y también de Vietnam, Filipinas, Indonesia y otros del lejano oriente— que a menudo trabajan varios años en Norteamérica y aún deciden radicar ahí permanentemente, lo que da a la relación capital-trabajo nuevas y más complejas modalidades, a nivel internacional.
- El rasgo que quizás caracteriza la estrategia del capital transnacional consiste en la reestructuración, que en parte —como ya vimos— es expresión de la crisis misma y en parte la respuesta a ella. Esa reestructuración adopta diversas formas —en efecto suele ser productiva, tecnológica, laboral, corporativa, comercial y financiera— y si bien tiende a profundizar la internacionalización del capital y elevar la tasa de ganancia, se la presenta como la condición del progreso y la modernización de economías como las nuestras y como obligada y aun única respuesta a un proceso de «globalización», «interdependencia» y «modernización» que exige abrirse a la nueva tecnología y a la nueva economía internacional, no porque ello convenga al capital monopolista y a los países imperialis-

tas sino porque supuestamente así lo reclaman la ciencia, la razón y las leyes que rigen el proceso de desarrollo de la sociedad.

Y para asegurar esa necesaria restructuración, el FMI y los organismos financieros internacionales más poderosos, ahora no se conforman con una más estricta condicionalidad en sus préstamos sino que intervienen abiertamente en los asuntos internos de otros países, diseñan su política económica y ejercen toda clase de presiones para que ésta se aplique en la mayor medida posible de manera ortodoxa.

En otros tiempos solía decirse, y a veces ello era realmente así, que el imperialismo se aliaba a los grupos «feudales» o más atrasados y se volvía un obstáculo al desarrollo capitalista. Hoy las cosas son distintas. A nuestro juicio, en los países capitalistas económicamente más avanzados de Latinoamérica, la fracción dominante del capital es el capital monopolista, e incluso estatal-monopolista. Esta se afirma en la última fase de la actual crisis, y hoy es indudable que es la base en que se sustenta la nueva oligarquía empresarial y financiera. Pues bien, en ausencia de un desarrollo tecnológico autónomo y de una vigorosa industria nacional de bienes de capital, esa oligarquía de la que incluso forman parte rentistas e inversionistas y ricos, altos funcionarios gubernamentales a menudo educados en los Estados Unidos, se liga estrechamente al capital extranjero, que siendo o no socio de ciertas empresas y grupos, es quien controla la tecnología, los mercados internacionales y el financiamiento.

En la presente fase de la crisis, mientras el Estado se debilita, el capital monopolista privado se refuerza y vuelve el extremo dominante de la contradicción Estado-monopolios. Y esto ocurre porque en tanto que el primero se repliega, reduce la inversión y el gasto público, contrae su radio de intervención en la vida económica, vende al capital privado numerosas empresas y, en ejercicio de la política «neoliberal» de hecho renuncia a buena parte de su soberanía, contribuye a empobrecer y a debilitar la organización de amplias capas populares cuya participación en la estructura del poder y en la toma de decisiones se angosta, y al mismo tiempo apoya a las fracciones más poderosas de la clase dominante, que ahora reclaman una creciente y más directa presencia incluso en la conducción política del Estado, porque se sienten y en realidad son más fuertes, porque su más cercana relación y aun asociación con el capital transnacional les permite actuar como si ellas fueran las únicas capaces de lograr la modernización tecnológica y el desarrollo económico.

En donde la relación del capital extranjero se da fundamentalmente con la nueva oligarquía monopolista nacional y ésta, ligada estrechamente al Estado y su política se ostenta como una fuerza social modernizante y progresista que no sólo acepta sino que reclama ciertos cambios y que aun siendo en realidad políticamente muy conservadora, habla de libertad, de independencia y de la necesidad del

diálogo y la concertación para lograr la democracia, se vuelve hoy muy difícil comprender que esas nuevas formas de integración del capital entrañan un obstáculo formidable para un desarrollo independiente, y ganar al pueblo a una acción antimperialista y antioligárquica.

Dentro del marco del viejo panamericanismo imperialista, incluso se pretende hacer aceptar a nuestros pueblos la engañosa y falsa tesis monroísta de que el hemisferio americano debe unirse, ahora para defenderse de la revolución y el socialismo e integrarse regionalmente a escala no latinoamericana sino propiamente continental, y de que, por razones de seguridad nacional de los Estados Unidos, el territorio y los mares de México, Centroamérica, Panamá y los países del Caribe deben considerarse un espacio estratégico e incluso una zona «propia» sujeta al control norteamericano.

Es tal la arrogancia imperial que los ideólogos norteamericanos más conservadores pretenden hoy que toda transformación social y aun cualquier intento de buscar nuevos cambios que rebasen el marco capitalista tradicional, entrañan acciones subversivas y antidemocráticas inadmisibles que atentan contra la «libertad» y que, como vimos recientemente en Granada, Nicaragua y Panamá, justifican incluso la intervención militar estadounidense. Y una nueva expresión de esa prepotencia es postular que el «fracaso» socialista es ya evidente y que los países que viven bajo este nuevo sistema tendrán que hacer los cambios que la ideología imperialista considera necesarios, empezando por realizar elecciones «libres» y fortalecer la propiedad privada.

Tales planteos pueden parecer demasiado burdos e inaceptables. Pero una de las mejores armas imperiales, en la histórica lucha que hoy se libra, es la propaganda. Los Estados Unidos concretamente, en su relación con Latinoamérica no se limitan a usar su fuerza económica, a ejercer presiones diplomáticas e influir políticamente en favor de sus posiciones e intereses. Emplean, además, y lo hacen con profesionalismo y a menudo con habilidad, inteligencia y eficacia, su enorme aparato publicitario para difundir su ideología y vender el *american way of life* como algo que significa libertad, democracia, progreso, cultura y respeto a los derechos humanos, pese a que en realidad quiere decir más bien todo lo contrario.

El uso de la televisión, a partir de una tupida red de satélites; del radio, la prensa, el cine, el video y los libros, la enseñanza del inglés, la educación a diversos niveles en los más variados campos, la computación, las becas para estudiar en la «metrópoli», los seminarios, las visitas especiales, los programas de adiestramiento, el intercambio organizado y otros medios, los profesionales de la propaganda intentan convencernos de que lo único razonable, sensato y aun viable

es su estrategia, una estrategia según la cual el mundo se internacionaliza, se «globaliza» y vuelve de tal manera interdependiente que, conceptos tales como independencia y soberanía nacionales resultan ya anacrónicos y aun quiméricos. Hoy basta —nos dicen— una soberanía limitada pues la interdependencia sustituye a la dominación y la dependencia.

Lo que realmente importa es que nos «modernicemos» y sepamos situar en la nueva comunidad internacional en desarrollo aceptando el papel que, en esta dinámica y cambiante división del trabajo nos toca jugar. Y lo que es claro es que las oligarquías monopolistas nacionales y otros segmentos menos poderosos pero que en realidad creen inviable un desarrollo independiente, cuando más con ciertas contradicciones secundarias se acomodan en actitud pasiva y a menudo aspirando a convertirse en socios mejores o en un pequeño eslabón de la cadena del capital trasnacional. O sea que renuncian de hecho a la independencia y al justo reclamo de un nuevo orden económico internacional, y se conforman con el papel subordinado que les asignan en nombre de la ciencia y la modernidad los grandes monopolios en el viejo orden de cosas que ellos controlan.

En busca de una estrategia alternativa

La estrategia y la política a que hemos hecho referencia no parecen, en resumen, ser capaces de ofrecer a nuestros pueblos un desarrollo medianamente estable, autosostenido, independiente, democrático y realmente moderno que responda a sus mejores intereses.

Si bien en los últimos años se producen algunos cambios significativos, creer que la crisis ha quedado atrás y que en Latinoamérica empieza abrirse una nueva larga fase de expansión económica se antoja, al menos por ahora, una ilusión. Lo que sin embargo no quiere decir que nuestras economías hayan por fuerza de seguir estancadas y que una recuperación pasajera y débil, en que el PIB crezca 3 o 4% como la que se logró en ciertos momentos en algunos países durante este decenio, sea inviable.

Incluso podría pensarse que, tras una masiva desvalorización de capital a lo largo de ya muchos años, aun de no darse una profunada renovación del capital fijo a partir de altas tasas de acumulación y un rápido avance tecnológico, se puede producir cierto crecimiento, sobre todo en donde el capital monopolista nacional y extranjero tenga una base productiva sólida y diversificada que le permita proyectarse con éxito hacia la exportación, y en donde, a partir del impulso a programas de obras y servicios públicos que ahora realice y financie el capital privado, se logre la ampliación de la demanda y del mercado

interno. Pero aun si ello ocurre no bastaría para librar a nuestras economías de la crisis, y menos para consolidar las bases de un desarrollo independiente. Para avanzar en esta dirección tendrían que producirse cambios de mayor alcance, en el marco de una estrategia y una política de desarrollo muy diferentes de la actual.

No tendría objeto que, en estas líneas, intentáramos bosquejar lo que desde esa nueva perspectiva pudiera hacerse. Reiterar ciertas cosas en planos declarativos y en el papel, no es lo que a estas horas más necesitamos. Me limitaré, en tal virtud, a señalar que lo esencial es crear condiciones que permitan reducir en la mayor medida posible y cuanto antes el saqueo que desde hace años sufre Latinoamérica, reactivar la acumulación de capital productivo y reanudar el crecimiento, entender que éste no sólo es función de una mayor inversión sino del avance tecnológico y una reorientación del desarrollo socioeconómico y aun político en su conjunto, que permita reforzar la independencia nacional y la democracia, y asegurar un nivel de vida digno a nuestros pueblos.

La posibilidad de abrir paso a una nueva estrategia supone, en primer lugar, partir de la realidad tal cual es, o sea reconocer que las condiciones son difíciles y aceptar de un lado la necesidad de una profunda y genuina modernización, así como el hecho de que la internacionalización del capital es un proceso histórico que se acentúa en la actualidad y al que no podemos sustraernos. Pero tan importante como reconocer tal cosa es que ello no supone renunciar a nuestra independencia sino al contrario, subrayar su importancia estratégica y entender que si bien las clases dominantes no son capaces de responder exitosamente a este reto, sí lo son los pueblos, como lo demuestran Cuba y Nicaragua, en tanto proyecten su desarrollo en un sentido nacionalista, y a la vez antimperialista y realmente internacionalista y revolucionario. Lo que en otras palabras significa que decidir si el desarrollo a que aspiramos es o no viable no es algo abstracto, sino una cuestión concreta y vital que depende de qué fuerzas ejerzan el poder. Y la lucha por el poder, en consecuencia, es un asunto estratégico fundamental.

Las fracciones burguesas más poderosas hoy dominantes tenderán probablemente, en general, a seguir haciendo lo que hasta aquí y no sólo no romperán con el imperialismo en busca de mayores espacios y cierta libertad, sino que aceptarán un papel subordinado salvo que la crisis misma y su posible agravamiento político les haga ver la necesidad de ciertas reformas así sean éstas menores.

Los elementos y aun fracciones burguesas que se muestran inconformes con la situación y la política económica prevalecientes, más que buscar la solución a los problemas avanzando hacia adelante, acaso tiendan a volver atrás, a las líneas de acción de corte keynesiano utilizadas hasta los años setenta, es decir anteriores al

“neoliberalismo” fondomonetarista, y que los empresarios privados califican a menudo de estadistas, populistas e ineficaces.

Aunque quizás la mayor debilidad de estas fuerzas consiste en que —sobre todo cuando su acción es más coyuntural y se mueven fundamentalmente en planos y luchas electorales—, explicablemente tienden a ver a los gobiernos actuales y aun a las organizaciones políticas más ligadas a ellos como el enemigo principal mientras que el imperialismo se desdibuja y aun queda de lado, pensamos que sería un grave error menospreciar a tales fuerzas, especialmente cuando tienen una amplia base popular y actúan en el seno de movimientos de masas que aun siendo en gran parte espontáneos y heterogéneos, en el contexto de la crisis pueden ser el punto de partida de una nueva situación y de un cambio favorable en la correlación de fuerzas políticas.

La incapacidad de las clases en el poder para resolver los problemas más graves y el muy perjudicial impacto de la crisis sobre la mayoría del pueblo, contribuyen sin duda a extender el descontento y a que muchas personas, hasta ahora pasivas, empiecen a actuar de diversas maneras y en diferentes ámbitos sociales.

La posibilidad de acciones de mayor alcance que representen una más amplia constelación de fuerzas bajo una dirección no burguesa, y que realmente pueda avanzar hacia el poder, en la situación actual no parece fácil pero, desde luego, tampoco imposible. El que ello se produzca o no dependerá, a nuestro juicio, del curso e intensidad de la lucha popular hoy desigual y todavía dispersa, y de la capacidad de los trabajadores y pequeños productores urbanos y rurales, proletarios y de capas medias y aun elementos propiamente burgueses, para organizarse, unirse y cobrar conciencia de la verdadera dimensión de la lucha, y de la medida en que de ésta surja una vanguardia revolucionaria consecuente y capaz de dirigir el proceso.

Hoy, empero, también es necesario y muy importante entender que si bien ésta parece ser, incluso en mayor medida que cuando Martí lo planteó hace ya un siglo, la hora de la segunda independencia de nuestra América, las nuevas y más complejas formas de acción del imperialismo reclaman revisar a fondo, modificar, actualizar y enriquecer las bases y ampliar el marco en que esa lucha decisiva se desenvuelve. Al respecto hay varias cuestiones importantes y que se antojan indiscutibles. Por ejemplo:

- La lucha por afirmar nuestra plena independencia difícilmente tendrá éxito si no se vincula estrechamente con la lucha por la democracia y con las demandas más sentidas del pueblo, o si se libra de manera aislada y sin el concurso y la cooperación de otros pueblos;
- Dada la naturaleza y alcance de los problemas en juego así como de las fuerzas que los determinan, el desarrollo se vuelve cada vez

más un proceso multinacional, que obliga a conjugar esfuerzos en los más diversos planos, a defender conjuntamente intereses comunes y aun a negociar multilateralmente, y al más alto nivel, ciertos asuntos que hasta ahora se han manejado de manera bilateral;

- En Latinoamérica y el Caribe, concretamente la integración regional, a partir de políticas diferentes de las actuales que impidan que el capital transnacional sea el principal beneficiario de ese esfuerzo y que abran nuevos mercados y campos de acción a los capitales nacionales, públicos y privados, es un instrumento fundamental, desde luego de no fácil empleo pero sin duda prometedor, que hasta ahora casi no se ha utilizado por nuestros pueblos;
- La cooperación sur-sur, o sea entre los propios países subdesarrollados, a escala de todo el llamado tercer mundo es también un medio de acción que, pese a sus problemas y limitaciones, reclama una creciente atención;
- Muy importante puede llegar a ser, asimismo, el intercambio y la cooperación entre nuestros países subdesarrollados y la comunidad socialista, en particular los países más industrializados, sobre todo a estas horas en que, bajo el impacto de la revolución científico-técnica y la internacionalización del capital, las relaciones económicas se amplían y la economía se reestructura, de diversas maneras.

Si, como es probable, los países socialistas se fortalecen a partir de los cambios ya en proceso o que están por realizarse, en poco tiempo los nuestros podrían contar con mercados adicionales y en rápida expansión para algunas de sus exportaciones y con nuevas fuentes de abastecimiento de ciertos productos; y los propios países socialistas podrían apoyar su desarrollo, en mucha mayor medida que hasta ahora, en nuestras economías. Lo que querría decir que aparte de que tal relación es fundamental en la lucha antimperialista y por la liberación nacional, incluso desde el punto de vista económico puede tener una significación mucho mayor de lo que generalmente se piensa.

- La lucha por la liberación de nuestros pueblos no es sólo económica: es social, ideológica, desde luego política e incluso cultural, o sea que se libra en los más diversos planos. Y el cultural, por cierto, no es de los menos importantes. Frente a la ofensiva enajenante y desnacionalizadora del imperialismo y al intento de imponernos y hacer prevalecer valores, instituciones y líneas de acción que riñen con lo mejor de nuestra cultura y nuestra historia, el conocimiento profundo de ésta, el recoger sus más valiosas enseñanzas y defender y enaltecer nuestro patrimonio cultural, es fundamental para reforzar nuestras posiciones económicas e impulsar y reorientar nuestro desarrollo, y para hacer valer la justa

demanda de un nuevo orden económico internacional y abrir paso a la lucha por nuestra cabal independencia y por condiciones de vida dignas para los pueblos de nuestra América.

Pese a estar históricamente en descomposición, al poderoso imperialismo concretamente norteamericano no podremos enfrentarnos con éxito desde posiciones sectarias, dogmáticas o verbalmente radicales que a la postre aislan y debilitan, ni a partir de esquemas simplistas y librescos que nos divorcian de la realidad. Esta, y la capacidad para entenderla a fondo y actuar certeramente en el intento de transformarla debieran ser la clave. Y, por fortuna, si algo tiene nuestra América es una experiencia valiosísima e incluso triunfos de significación histórica en la lucha revolucionaria por la liberación de nuestros pueblos.